



Atribución-NoComercial 2.5 Colombia (CC BY-NC 2.5)

La presente obra está bajo una licencia:

Atribución-NoComercial 2.5 Colombia (CC BY-NC 2.5)

Para leer el texto completo de la licencia, visita:

<http://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.5/co/>

Usted es libre de:



Compartir - copiar, distribuir, ejecutar y comunicar públicamente la obra

hacer obras derivadas

Bajo las condiciones siguientes:



Atribución — Debe reconocer los créditos de la obra de la manera especificada por el autor o el licenciante (pero no de una manera que sugiera que tiene su apoyo o que apoyan el uso que hace de su obra).



No Comercial — No puede utilizar esta obra para fines comerciales.

IMPORTANCIA Y ALCANCES DEL DEBIDO PROCESO COMO DERECHO FUNDAMENTAL EN COLOMBIA*

IMPORTANCE AND SCOPE OF DUE PROCESS AS A FUNDAMENTAL RIGHT IN COLOMBIA

*Andres Felipe Chaverra Paz***

Universidad Católica de Colombia

RESUMEN

En este trabajo se presenta un análisis del debido proceso como derecho fundamental; el estudio se cimenta en determinar la importancia y el alcance constitucional de esta institución en Colombia. La relevancia de la investigación radica en que con este trabajo se desarrolla un espacio de razonamiento en donde se visualiza la vigencia del artículo 29 de la Constitución de 1991. A partir del cual el Estado dentro del territorio nacional tiene el deber de garantizar que este derecho fundamental se aplique a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas, respetando su contenido, en razón del cual ninguna persona podrá ser juzgada sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia a la plenitud de las formas propias de cada juicio. Institución que también abarca los derechos a la presunción de inocencia, de defensa, de presentar y controvertir pruebas, de impugnar la sentencia condenatoria, y de no ser juzgado dos veces por los mismos hechos.

Palabras Clave: derechos humanos, derechos fundamentales, debido proceso, garantías judiciales, derecho procesal, derecho sustantivo.

ABSTRACT

This work presents an analysis of due process as a fundamental right; the study is based on the importance and constitutional scope of this institution in Colombia. The relevance of the research lies in the fact that with this work a space of argumentation is developed where the validity of article 29 of the 1991 Constitution is visualized. From which the State within the national territory has the duty to guarantee that this right fundamental is applied to all kinds of judicial and administrative proceedings, respecting its content, for which reason no person may be tried except in accordance with laws pre-existing to the act imputed to him, before a competent judge or court and in compliance

* Artículo presentado como requisito parcial para optar al título de abogado. Universidad Católica de Colombia, sede Bogotá D.C. 2020.

** Optante al título de abogado de la Universidad Católica de Colombia, 2020, correo electrónico: afchaverra25@ucatolica.edu.co. Este artículo fue dirigido por el doctor Jorge Enrique Leon Molina, docente - investigador de la Universidad Católica de Colombia, Magister en filosofía del derecho y teoría jurídica de la Universidad Libre de Bogotá – Colombia.

with the fullness of the forms of each judgment. Institution that also covers the rights to the presumption of innocence, defense, present and dispute the evidence, challenge the conviction and not be tried twice for the same facts.

Keywords: human rights, fundamental rights, due process, judicial guarantees, procedural law, substantive law.

SUMARIO

Introducción. 1. Origen y concepto del debido proceso. 2. El debido proceso como derecho humano y fundamental. 3. El derecho fundamental al debido proceso en Colombia. 3.1. El derecho fundamental al debido proceso en la Constitución de 1991. 3.2. Importancia del derecho fundamental al debido proceso en Colombia. 3.3. Alcances del derecho fundamental al debido proceso en Colombia. Conclusiones. Referencias.

INTRODUCCIÓN

En el ámbito internacional, el debido proceso es un derecho humano. Por ejemplo, el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos cataloga el debido proceso como una garantía judicial, y en su numeral 1 señala que:

“Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter”. (Naciones Unidas, 1969, p. 4)

Del anterior postulado, sumado al consignado en otros instrumentos internacionales se desprende que el debido proceso es el camino que conduce a la solución justa de un conflicto. Esto se logra estableciendo “condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa de aquéllos cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial” (Corte IDH, OC 9/87, párr.24, 34). Lo anterior, dicho en pocas palabras, es lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha denominado “derecho de defensa procesal” (Corte IDH, caso Genie Lacayo Vs. Nicaragua, párr. 74).

Ahora bien, en Colombia la Constitución de 1991 es la norma suprema que irradia todo el conjunto de normas jurídicas vigentes, como norma fundante en su artículo 1 adopta el Estado Social de Derecho como modelo de Estado. Consecuentemente, busca proteger la dignidad humana por medio de garantías jurídicas como lo son los principios y derechos como el del debido proceso. No obstante, este derecho en la práctica presenta varias problemáticas, entre éstas es que tiende a ser desconocido por las autoridades públicas y por lo tanto es vulnerado en muchas ocasiones (Rodríguez-Rescia, 1998). Por ende, resulta vital establecer la importancia y el alcance para robustecer a esta institución. Precisamente, el propósito de este artículo es examinar, desde la Constitución colombiana de 1991, la importancia y alcance del derecho fundamental al debido proceso, y para ello se acudirá a la revisión del material doctrinario, constitucional, y jurisprudencial.

Así las cosas, este trabajo se justifica en la medida que con el análisis del derecho fundamental al debido proceso se tendrán bases objetivas que contribuirán al fortalecimiento de esta institución. Por consiguiente, con este estudio se robustece la noción del debido proceso y se procura por el afianzamiento de sus medidas de implementación en aras de que el poder público no conculque el portafolio de derechos constitucionales fundamentales inherentes al ser humano, sino que por el contrario garantice unos mínimos estándares de justicia distributiva. En las siguientes páginas se genera un espacio de análisis que permite enriquecer y fortalecer el conocimiento de la institución del debido proceso como derecho fundamental. El artículo se divide en tres partes: En la primera, se encuentra el marco conceptual del debido proceso. En la segunda, se desarrolla el debido proceso como derecho humano y fundamental. En la tercera, se estudia el derecho fundamental al debido proceso en Colombia, su importancia y alcances a partir de la Constitución de 1991.

1. ORIGEN Y CONCEPTO DEL DEBIDO PROCESO

Para desarrollar la hipótesis planteada al inicio del texto, esta es, analizar la institución del debido proceso, su importancia y alcances como derecho fundamental en Colombia a partir de la Constitución de 1991, es necesario comenzar por establecer ¿qué se entiende por debido proceso?, así, uno de los antecedentes más conocidos lo encontramos en el *Common Law* con el principio *due process of law*.

Como lo muestra el profesor Jorge Santana (2016), la concepción anglosajona del debido proceso se cimenta bajo el reclamo de la población por alcanzar unos mayores estándares de justicia a través del establecimiento de reglas más transparentes, escenario ante el cual la monarquía tuvo que ceder concediendo prerrogativas jurídicas, que comenzaron como garantías procesales de libertad, pero que con el paso del tiempo se fueron desarrollando obteniendo un mayor alcance llegando hasta el derecho sustantivo. Remontándonos en la historia:

“En el siglo XIII los hombres normandos cansados de los abusos de la monarquía se enfrentaron al rey Juan Sin Tierra y presionaron porque se incorporaran unas reglas claras,

lo que dio origen a la Carta Magna en el año 1215. En el capítulo 39 se institucionalizó la prohibición de privar de la libertad, molestar, y despojar de la propiedad a los hombres libres, a menos de que en un juicio legal de sus pares y con apego a la ley de la tierra se determinara lo contrario. Aunque no se hiciera mención directa y nominal del debido proceso, porque en principio el postulado estaba relacionado con la “*per legem terrae*” o ley de la tierra, lo cierto es que desde entonces el desarrollo de la institución del debido proceso se ha construido jurisprudencialmente en el derecho anglosajón, incluso se consolidó en el deporte, por ejemplo, con la creación del fútbol en Inglaterra en el siglo XVII, y sus posteriores regulaciones como la de Cambridge en 1846, pero ante todo con la implementación del *fair play of the fair trail*, juego limpio para un juicio justo”. (Santana, 2016, p. 26)

Por su parte, el derecho norteamericano desarrolla su propia concepción del debido proceso, de tal forma planteó en la V enmienda de la Constitución de 1791 que los derechos fundamentales a la vida, libertad y propiedad se garantizan por medio del debido proceso, lo cual es ratificado en 1868 con la XIV enmienda la cual consagró que “ningún Estado privará a las personas de su vida, libertad o propiedad sin debido proceso legal, ni denegará igual protección de la ley dentro de la jurisdicción” (Naciones Unidas, 2018, p. 59).

En línea de definición, la Real Academia de la Lengua Española (2020) define el debido proceso como:

“El derecho de toda persona a un proceso en el que se respeten los principios y las garantías de naturaleza procesal consagrados constitucionalmente: imparcialidad del juez, publicidad del proceso, posibilidad de asistencia de abogado, prohibición de las dilaciones indebidas y utilización de los medios de prueba pertinentes”. (R.A.E., 2020, p. 65)

Entonces se puede entender que el debido proceso es la herramienta jurídica que hace que las normas jurídicas, como lo son los tratados internacionales, la Constitución, y las leyes, sean eficaces. Dicho de otro modo, es un instrumento que sirve para hacer efectivas las demás normas, y es directriz y límite para desempeñar el ejercicio público. Así, el debido proceso es concebido

como una garantía judicial del Estado de Derecho, posición desde la cual se han cimentado las bases fundamentales y finales de “la tutela de las libertades del individuo frente a las variadas formas de ejercicio arbitrario del poder, particularmente odioso en el derecho penal” (Ferrajoli, 2005, p. 13). En tal dirección, como lo señala el profesor German Bidart (2004):

“Lo que es garantía apunta a la disponibilidad que tiene la persona para movilizar al Estado en protección suya, tanto para evitar ataques como para restablecer la situación anterior al ataque, o para compensarle el daño sufrido, sin dejar de lado la sanción al agresor”. (Bidart, 2004, p. 183)

Las anteriores características del debido proceso, son acogidas por normas internacionales como por ejemplo el artículo 8 de la Convención Americana Sobre los Derechos Humanos, al codificar el debido proceso como pilar de las garantías judiciales. Aclarando que su atención no está limitada exclusivamente a lo judicial, “sino al conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales a efecto de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos” (Corte IDH, caso Ivcher Bronstein Vs. Perú, párr. 102). De ahí que, se pueda señalar que el debido proceso no solo es un derecho en sí mismo, sino que “es la columna vertebral de los derechos humanos y es una garantía ineludible para la existencia de un Estado Constitucional de Derecho” (Santana. 2016, p. 33).

Ahora bien, el profesor Santana (2016) plantea que el debido proceso en sentido amplio busca fortalecer la seguridad jurídica al interior de un Estado, lo cual no se logra únicamente desde el punto formal del proceso como mecanismo heterocompositivo de resolución de conflictos, sino que indispensablemente el proceso está ligado al derecho sustantivo, en tal sentido:

“El debido proceso tiene una concepción bifronte, por un frente está el debido proceso sustantivo (*substantive due process*), el cual se define como las normas, leyes, decretos, actos administrativos, y demás preceptos emanados de un acto de poder, sea este constituyente o constituido, como es el caso de los órganos competentes del Estado. Y por el otro frente está el debido proceso adjetivo, formal o procesal (*procedural due process*) el cual es el procedimiento mismo, esto es, los pasos preestablecidos que se deben respetar

por parte del poder público para crear las normas, ejecutarlas y aplicarlas, y que pese a ser impuestas y de exigir el cumplimiento de deberes, también garantiza el ejercicio libre de los derechos, razón por la cual las actuaciones y decisiones administrativas y judiciales con las que se afectan los derechos deben tener una ritualidad preestablecida. Consecuentemente, es en sede judicial en donde se determina si el acto de poder respeta el paso a paso, esto es, los requisitos establecidos del debido proceso, sin importar si el acto de poder es sustantivo o adjetivo, y este, es abusivo, injusto, arbitrario o irracional”. (Santana, 2016, p. 35)

En efecto, el debido proceso desde el punto de vista sustantivo avoca a que las actuaciones emanadas de una autoridad no solo estén encuadradas en una norma jurídica, sino que dichas actuaciones deben ser razonables, justas, y corresponder a los valores y principios constitucionales, así como a los derechos humanos y fundamentales. Así, desde la dimensión sustantiva del debido proceso se contiene la axiología constitucional de los actos de poder, esto es, las actuaciones están limitadas, y cuando se ejecutan deben estar justificadas (Linares, 1989). Y desde la dimensión formal, el debido proceso señala las directrices bajo las cuales se debe desplegar la actuación de la autoridad, esto significa que el debido proceso formal es:

“Una institución instrumental en virtud de la cual debe asegurarse a las partes en todo proceso -legalmente establecido y que se desarrolle sin dilaciones injustificadas- oportunidad de ser oídos por un tribunal competente, predeterminado por la ley, independiente e imparcial, de pronunciarse respecto de las pretensiones y manifestaciones de la parte contraria, de aportar pruebas lícitas relacionadas con el objeto del proceso y de contradecir los aportados por la contraparte, de hacer uso de los medios de impugnación consagrados por la ley contra resoluciones motivadas y conforme a Derecho de tal manera que las personas puedan defender su derechos”. (Hoyos, 2004, p. 53)

Nótese como con los anteriores postulados se puede analizar que por medio del debido proceso lo que se busca es limitar al poder público frente a la relación que debe guardar con las personas, y a su vez las dota de un blindaje que busca alcanzar que le sean garantizados sus derechos humanos. En efecto, el debido proceso tiene como objetivo revestir de justicia y equidad

a un ordenamiento jurídico, pues darle a cada quien lo que le corresponda, significa equilibrar la balanza de los derechos de los particulares frente al Estado (Santana. 2016).

2. EL DEBIDO PROCESO COMO DERECHO HUMANO Y FUNDAMENTAL

Como se evidenció en el acápite anterior el debido proceso surge como una pretensión jurídica de los individuos frente al poder público, pero en su desarrollo adquirió el rango de fundamental por emanar de valores como el de la dignidad humana, la justicia, la libertad y el libre desarrollo de la personalidad, entre otros. Por ello, el debido proceso alcanzó una protección reforzada frente al poder estatal. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos humanos en la Opinión Consultiva N° 16 del 01 de octubre de 1999 nos recuerda que:

“El proceso es un medio para asegurar, en la mayor medida posible, la solución justa de una controversia. A ese fin atiende el conjunto de actos de diversas características generalmente reunidos bajo el concepto de debido proceso legal. El desarrollo histórico del proceso, consecuente con la protección del individuo y la realización de la justicia, ha traído consigo la incorporación de nuevos derechos procesales”. (Corte IDH, OP 16/99, párr. 117)

En línea, se puede evidenciar que la evolución del debido proceso ha conllevado a que tenga el rango de un derecho humano con el alcance de protección jurídica que esto conlleva desde el derecho internacional. Así, el debido proceso es consignado como un derecho humano en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la Convención Americana sobre Derechos Humanos¹, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos². Del estudio de los anteriores instrumentos, los cuales se encuentran vigentes, se puede evidenciar un alcance progresivo del derecho humano al debido proceso, y que para efectos de este trabajo se destacan en paráfrasis varios elementos de los mismos.

En orden cronológico de creación normativa en el plano internacional tenemos la

¹ Aprobada por el Congreso de la República de Colombia mediante la Ley 16 de 1972.

² Aprobado por el Congreso de la república de Colombia mediante la Ley 74 de 1968.

Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas de 1948, este instrumento compilado por las Naciones Unidas (2015) en el artículo 9 reconoce que nadie podrá ser detenido con arbitrariedad, preso ni desterrado. En el artículo 10 consigna que toda persona tiene el derecho de ser oída en igualdad de condiciones, de forma pública y con justicia por un tribunal imparcial. En el artículo 11 señala que toda persona se presume inocente hasta que se demuestre lo contrario en un juicio justo, con garantías de sus derechos.

Por su parte, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966, igualmente recogido por las Naciones Unidas (1966) en el artículo 9 prohíbe la detención arbitraria y contraria a las normas, establece el derecho del detenido a que se le informe del delito que se le acusa, señala la obligación del Estado de conducir al detenido con celeridad ante el juez competente, quien emitirá su pronunciamiento en un plazo razonable, en el que deberá pronunciarse sobre la legalidad de la detención, ordenando la libertad en caso de ser ilegal. En suma, contempla una reparación a favor del detenido en caso de haber sido detenido de forma ilegal. Avoca a que la prisión preventiva, no debe tenerse como la regla general, aunque para dejar en libertad a un detenido que será llevado a juicio se deben tener las garantías de que el mismo comparecerá. El artículo 10 señala que los detenidos serán tratados humana y dignamente, garantizando los derechos que les asisten, insta a separar a los procesados y los condenados, a los menores y adultos, además traza los objetivos de la privación de la libertad del individuo, los cuales siempre deben ser la rehabilitación, reforma, resocialización y readaptación del detenido. El artículo 14 expresa que todas las personas son iguales ante la jurisdicción, también consagra el derecho del individuo a ser oído públicamente y con el respeto de las garantías que le asisten por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido por la ley, con el rotundo apego a normas preexistentes al acto que dio origen al juicio; señala que la prensa y el público en general podrán ser excluidos del juicio por circunstancias morales, de orden público o seguridad nacional, no obstante, toda sentencia en materia penal o contenciosa deberá ser pública, con la excepción de aquellos casos en que los intereses de los menores de edad exijan lo contrario. En línea, asiente a que toda persona goza de la presunción de inocencia hasta que no sea derrotada en un juicio conforme a la Ley.

El artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos también plasma las garantías que tiene todo acusado durante el proceso, entre estas: a ser informado sin retrasos de los

hechos y delitos de los que es acusado, en un idioma que comprenda. Así como, a contar con un tiempo razonable y los medios necesarios para preparar su defensa. Al igual que a contar con la asistencia de un defensor, ser juzgado en un tiempo razonable y sin demoras, a estar presente en el proceso, aportar y controvertir las pruebas, interrogar a los testigos, obtener su comparecencia, ser asistido gratuitamente por un traductor o intérprete sino comprende o habla el idioma del Tribunal y por un defensor de oficio en caso de no contar con los recursos para contratar un abogado. La persona también goza de la garantía de no declarar contra sí mismo y a recurrir los pronunciamientos.

Ahora bien, el Pacto consagra un mayor contenido para el derecho del debido proceso al señalar que se deberá reparar a la persona que haya sido privada de la libertad injustamente, cuando se pruebe la inocencia en juicios, o cuando el detenido probando su inocencia logra que se revoque una sentencia que lo declaró culpable o se haya demostrado un error judicial, también se avanza al consignar el derecho que le asiste a las personas a no ser juzgadas ni sancionadas por un delito del cual ya hayan sido absueltas o condenadas (Naciones Unidas, 1966, pp. 5-6).

Años posteriores, en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos en San José de Costa Rica, en 1969 se suscribió y adoptó la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la cual es acopiada por la Organización Mundial de los Estados Americanos (1969) y con relación al debido proceso como derecho humano en el artículo 8 estipula las garantías mínimas judiciales de cualquier proceso o acusación penal que contra un individuo recaiga, entre estas, el derecho a ser oído por un juez competente e imparcial, con normas preexistentes, gozando de presunción de inocencia hasta que no se compruebe legalmente su culpabilidad. En suma, establece unas garantías mínimas, como el acceso a un traductor en caso de no comprender o hablar el idioma general del Estado que lo acusa, o a un intérprete, en el caso de los sordomudos, también señala que al detenido se le debe comunicar previa y detalladamente la acusación formulada, que se le debe garantizar el derecho de defensa bien sea personalmente o con la asistencia de su defensor de confianza, que en caso de no contar con los recursos deberá ser asistido por un defensor público proporcionado por el Estado dentro del plazo establecido por la ley, el detenido no debe ser obligado a declarar contra sí mismo, se le debe garantizar el derecho a recurrir el fallo ante juez o tribunal superior, y a aportar y controvertir las pruebas. El artículo 25

plasma que toda persona tiene el derecho a contar con un recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, el cual debe ampararlo contra cualquier actuación que vulnere sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la Convención Americana, indistintamente que la vulneración sea producto de un funcionario oficial. Igualmente, exige a los Estados a que se comprometan a establecer garantías para que la autoridad competente prevista por la ley decida sobre el derecho fundamental que la persona considera vulnerado, así como, a hacer cumplir la decisión adoptada y que proceda en aras de garantizar los derechos fundamentales de las personas.

Así las cosas, el debido proceso como derecho humano corresponde universalmente a todos los seres humanos (Ferrajoli, 2005a). Y como derecho humano se ha convertido en una garantía indispensable de defensa jurídica de las personas (Rodríguez-Rescia, 1998). En tal sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos señala que:

“La obligación de investigar, juzgar y, en su caso, sancionar a los responsables de violaciones de derechos humanos se encuentra dentro de las medidas positivas que deben adoptar los Estados para garantizar los derechos reconocidos en la Convención, de conformidad con el artículo 1.1 de la misma. Este deber es una obligación de medio y no de resultado, que debe ser asumida por el Estado como un deber jurídico propio y no como una simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa, o como una mera gestión de intereses particulares que dependa de la iniciativa procesal de las víctimas, de sus familiares o de la aportación privada de elementos probatorios”. (Corte IDH, caso Torres Millacura Vs. Argentina, párr. 112)

En efecto, con el derecho al debido proceso el individuo está revestido con garantías sustanciales y procesales que lo protegen frente a normas y actuaciones contrarias a los derechos fundamentales (Santana, 2016). Ahora bien, el debido proceso adquiere la connotación de derecho fundamental, pues está compuesto de una connotación definida en la Ley Fundamental, y establece un marco a la relación entre el individuo y el Estado (Alexy, 2002). De forma que, el debido proceso como derecho fundamental es un derecho subjetivo, y los derechos subjetivos pueden ser entendidos como:

“Cualquier expectativa positiva o negativa adscrita a un sujeto por una norma jurídica; y por status la condición de un sujeto, prevista así mismo por una norma jurídica positiva, como presupuesto de su idoneidad para ser titular de situaciones jurídicas”. (Ferrajoli, 2005a, p. 19)

Por consiguiente, el individuo por ser titular de situaciones jurídicas reclama de las actuaciones del poder razonabilidad no solo en la norma y la decisión sino también en los procedimientos formales que conducen a esa decisión (Sagüés, 1993). Dicho de otro modo, es lo que el Tribunal Constitucional de España en la sentencia STC 105 del 14 de junio de 1999 nomina como el derecho fundamental en cuya esencia se encuentra la base de garantías inherentes al espíritu del proceso, en sus propias palabras señala:

“Dentro del haz de garantías inherentes a la propia categoría del proceso, el debido proceso si se traduce literalmente la expresión norteamericana, o en nuestra terminología constitucional el derecho fundamental a un juicio justo, un proceso público con todas las garantías, conlleva con carácter instrumental el derecho a la defensa en juicio con la asistencia de jurisperitos, abogado y procurador, derechos ambos consagrados constitucionalmente en nuestra Ley Fundamental, como es bien sabido”. (Tribunal Constitucional de España, sentencia 105/1999)

3. EL DERECHO FUNDAMENTAL AL DEBIDO PROCESO EN COLOMBIA

Con la constitucionalización del derecho se ha procurado alcanzar mayor seguridad jurídica al interior de los Estados y evitar las injusticias que se producían por falta de normas preestablecidas y garantías fundamentales. Justamente, la armonía y articulación razonable y coherente entre el derecho sustantivo y el procedimental cobra plena vigencia desde los parámetros establecidos por los derechos fundamentales, pues en el Estado constitucional estos derechos se pueden entender como garantías procesales, esto es, se les otorga a los derechos humanos un contenido procesal de protección al interior de los Estados, lo que es reforzado desde el escenario

internacional, por lo que adquieren un estatus activo procesal. Aspectos que desde su hegemonía constitucional revisten a los derechos fundamentales de una protección reforzada, en donde los tribunales constitucionales adquieren protagonismo por fungir como garantes de los mismos (Calamandrei, 1962).

Así las cosas, los derechos fundamentales sirven de límite para el poder público, a la vez que revisten al individuo de la facultad de poder exigir su garantía material y procesal frente al poder legislativo, ejecutivo y judicial, de esta forma los derechos fundamentales están relacionados con el proceso, así como el proceso lo está con los derechos fundamentales (Haberle, 1997).

Los anteriores criterios fueron fortalecidos tras la segunda guerra mundial, así, el Estado de Derecho Constitucional fue acogido por varios estados, fundamentándose en constituciones cuyo objetivo ha sido desde entonces alcanzar y mantener la paz, pero no justificando los medios, sino concibiendo los derechos fundamentales como un pilar fundamental (Santofimio, 2003). El Estado Colombiano no fue ajeno al nuevo orden jurídico y en 1991 proclama la Constitución que se encuentra vigente.

3.1. El derecho fundamental al debido proceso en la Constitución de 1991

En la Constitución de 1991, el derecho al debido proceso se encuentra en el Capítulo 1 correspondiente a los derechos fundamentales, explícitamente se encuentra establecido en el artículo 29, lo que nos permite decir que el debido proceso es un derecho fundamental en Colombia, pues se encuentra enunciado directamente en la Ley Fundamental (Alexi, 2002).

En tal dirección, el artículo 29 de la Constitución señala textualmente que:

“El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio. En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará

de preferencia a la restrictiva o desfavorable. Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable. Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él, o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento; a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra; a impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho. Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso”. (Presidencia de la República de Colombia, 1991, p. 6)

El debido proceso como derecho fundamental en Colombia está ligado a la dignidad humana, pues como lo señala la Corte Constitucional en la sentencia T-227 de 2003, los derechos fundamentales en Colombia tienen las siguientes características:

“(i) Se relacionan funcionalmente con la realización de la dignidad humana, (ii) pueden traducirse o concretarse en derechos subjetivos y (iii) encuentran consensos dogmáticos, jurisprudenciales o de derecho internacional, legal y reglamentario sobre su fundamentalidad”. (Corte Constitucional, Sentencia T-227 de 2003)

Una de las características de la consignación constitucional del debido proceso es que al tener el rango de derecho fundamental, todo el poder público debe aplicar de una manera correcta las leyes preestablecidas teniendo como límite el respeto por la dignidad humana (Rodríguez-Rescia, 1998).

Otra de las características del debido proceso como derecho fundamental, es que es un derecho subjetivo, lo cual significa que el debido proceso le da a alguien prerrogativas que se encuentran plasmadas en la Ley, y esto lo faculta para reclamar a otro individuo o “institución el cumplimiento de un deber específico impuesto por el derecho positivo, aún mediante el ejercicio de una acción judicial” (Chinchilla, 2009, p.16). En ese sentido, el debido proceso como derecho fundamental, en Colombia, se puede entender como una garantía judicial de ejercicio.

Finalmente, el carácter de derecho fundamental del debido proceso no se encuentra solo

contemplado en Colombia como tal, como se pudo analizar en acápites precedentes, el debido proceso hace parte de los derechos humanos pues en el plano internacional se señalan unos estándares mínimos que si son reducidos por los Estados se entienden que van en contravía de los mismos, de forma que al constituir esas características mínimas se ha establecido una especie de “derecho común de los derechos humanos, que permite dar respuestas mínimamente uniformes a muchos de los problemas jurídicos que surgen en la práctica” (Diez-Picaso, 2013, pp. 30-31) .

3.2. Importancia del derecho fundamental al debido proceso en Colombia

El catalogar el debido proceso de forma explícita como derecho fundamental es de gran importancia, pues no da lugar a dudas de que las garantías específicas que contiene este derecho son preponderantes en Colombia, y por lo tanto, por un lado, se convierten en un límite para el poder público, y por el otro, gozan de un medio expedito de amparo como lo es la acción de tutela.

De tal forma, del derecho fundamental al debido proceso se pueden categorizar varios elementos que sirven como límite de las actuaciones del poder público y se constituyen como garantías importantes en cabeza de las personas. La Tabla No. 1 resume esquemáticamente dichos elementos:

Tabla No. 1
Elementos del derecho fundamental al debido proceso en Colombia
El debido proceso aplica para todas las actuaciones judiciales y administrativas
Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa
El juez o tribunal debe ser competente
Se deben observar las formas propias de cada juicio
Se debe aplicar la ley permisiva o favorable sobre la restrictiva o desfavorable
Toda persona se presume inocente mientras no se le haya declarado judicialmente culpable
El sindicado tiene derecho de defensa, y a la asistencia de un abogado escogido por él, o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento

Se tiene derecho a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas
Se tiene derecho a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra
Derecho a impugnar la sentencia condenatoria
Derecho a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho
Nulidad de pleno derecho de la prueba obtenida con violación del debido proceso

Fuente: Elaboración propia datos tomados del artículo 29 de la Constitución de 1991

El debido proceso como derecho fundamental le impone una obligación al poder público, la cual consiste en respetar las garantías consagradas en las normas, al igual que le ordena el deber de proteger dichas garantías normativas. Y es que a lo largo de la historia, los derechos fundamentales han tenido la función de imponer límites al poder público (Prieto-Sanchís, 1990). Así, el poder público es el sujeto “al cual se justifican reglas, prohibiciones y obligaciones dirigidas a impedir los abusos que dañan los derechos fundamentales” (Ferrajoli, 2001, p. 100). Por consiguiente, el deber que tiene el poder público de respetar y garantizar el debido proceso es el mismo deber que tiene con todos los demás derechos fundamentales (Schneider, 1979).

Así las cosas, en Colombia la acción de tutela se constituye como un mecanismo de protección judicial del derecho fundamental al debido proceso, de ahí su definición:

“Como un mecanismo de defensa judicial al cual puede acudir toda persona para obtener la protección inmediata de los derechos fundamentales, cuando éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señale la ley”. (Corte Constitucional, Sentencia C-483 de 2008)

Lo anterior se desprende del artículo 86 de la Constitución, y la procedencia de este mecanismo de protección, se da en el caso del debido proceso por cumplir con la característica de ser un derecho fundamental. Sin embargo, para poder invocarse la acción de tutela se requiere que el derecho haya sido amenazado o vulnerado y que se necesite de su amparo inmediato para evitar un perjuicio mayor (Corte Constitucional, Sentencia T-095 de 2016). Al final de cuentas, lo que se busca por medio del debido proceso es que el orden jurídico sea justo de ahí la categoría de este

derecho que puede ser protegido por medio de la acción de tutela, al respecto la Corte Constitucional señala que:

“La importancia del debido proceso se liga a la búsqueda del orden justo. No es solamente poner en movimiento mecánico las reglas de procedimiento y así lo insinuó Ihering. Con este método se estaría dentro del proceso legal pero lo protegible mediante tutela es más que eso, es el proceso justo, para lo cual hay que respetar los principios procesales de publicidad, inmediatez, libre apreciación de la prueba, y, lo más importante: el derecho mismo. El debido proceso que se ampara con la tutela está ligado a las normas básicas constitucionales tendientes al orden justo (para ello nada más necesario que el respeto a los derechos fundamentales); ello implica asegurar que los poderes públicos constituidos sujeten sus actos (sentencias, actos administrativos) no solamente a las normas orgánicas constitucionales sino a los valores, principios y derechos y este sería el objeto de la jurisdicción constitucional en tratándose de la tutela”. (Corte Constitucional, Sentencia T-280 de 1998)

3.3. Alcances del derecho fundamental al debido proceso en Colombia

La Corte Constitucional como institución legitimada por la Constitución para salvaguardar e interpretar la Constitución ha establecido en su jurisprudencia los alcances del derecho fundamental al debido proceso (Santana, 2016). Por ejemplo, en la Sentencia T-140 de 1993 señala que el debido proceso es una garantía estructural del Estado que aleja la subjetividad y asegura la objetividad de las actuaciones cubriéndolas de imparcialidad, al estabilizar el equilibrio entre las partes procesales (Corte Constitucional, Sentencia T-140 de 1993). En el entendido de que el debido proceso es un pilar del Estado, en Colombia como derecho fundamental guarda una relación inherente con los demás derechos fundamentales, lo que le da una mayor fuerza frente al poder estatal, tal y como lo reafirma la Corte Constitucional al señalar que:

“El debido proceso es todo un conjunto de derechos de las personas expresado en los artículos 28 (libertad de movimiento y otras cortapisas que se le imponen al Estado), 29 (el propio debido proceso y el derecho de defensa), 30 (recurso de habeas corpus), 31 (doble

instancia), 33 (inmunidad penal), 36 (derechos de asilo). La importancia del debido proceso se liga a la búsqueda del orden justo, por consiguiente, en la Constitución de 1991 el debido proceso es algo más profundo que tipificar conductas, fijar competencias, establecer reglas de sustanciación y ritualismos, indicar formalidades y diligencias”. (Corte Constitucional, Sentencia T-280 de 1998)

La línea del argumento que resalta la importancia que ostenta el derecho fundamental al debido proceso en el contexto colombiano, permite señalar que esta institución lo que busca es asegurar la vigencia de los derechos fundamentales, evitando que se cometan abusos de poder en contra de las personas, por tanto, incluso se protege frente a actuaciones o leyes contrarias a la Constitución o por fuera de la Ley. Sobre este alcance la Corte Constitucional determina que:

“El debido proceso es el conjunto de actuaciones que deben desarrollar los sujetos procesales y en donde es necesario respetar al máximo las formas propias de las ritualidades, por ende el legislador exige una mayor atención para asegurar al máximo los derechos sustantivos, puesto que entre más se ajusta al principio de juridicidad propio del estado de derecho y hace excluir por consiguiente cualquier acción contra *legem o preater legem*, por parte de las autoridades y de los operadores jurídicos”. (Corte Constitucional, Sentencia 751 de 1999)

Del artículo 29 y la interpretación de la Corte Constitucional, se puede analizar que el debido proceso se debe aplicar de forma obligatoria en todas las actuaciones administrativas y judiciales, lo cual refleja un límite al poder público, pues sus actos deben estar ceñidos a unos parámetros preestablecidos por la Ley para tener validez. Esto significa que los procedimientos judiciales y administrativos, deben garantizar la situación jurídica de las personas, atendiendo siempre las reglas del procedimiento debido, las cuales son de prevalente aplicación, con mayor razón por estar establecido en un derecho fundamental. El carácter de prevalencia de los derechos fundamentales en las actuaciones del Estado por encima del poder público, busca preservar los derechos de las personas. En este sentido, Juan José Echavarría (1991) señala que:

“Los derechos constitucionales no deben su fundamentalidad al nivel de su eficacia o a su

protección institucional o procesal, pues estos aspectos de los derechos fundamentales no son la causa de su valía, sino sólo el exponente de la misma. Así, los derechos fundamentales se protegen por su importancia, pero, obviamente, no deben su importancia a su protección. De modo que para nosotros no hay sino una fuente, o un criterio, necesariamente material, de la fundamentalidad de los derechos constitucionales, a saber: el de su relación, determinada ideológica, o teórica, o históricamente, o mediante referencias de este triple orden, con la dignidad y la libertad de la persona humana”. (Echevarría, 1991, p. 92)

Ahora bien, cuando con el debido proceso instituido con la Constitución de 1991, se señala que nadie “podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa...” (Presidencia de la República, 1991, p. 6), significa que el sometimiento de la personas a las actuaciones del poder público en el Estado colombiano está condicionado a que existan normas previas que regulen el acto y el procedimiento, pues las decisiones tomadas como resultado de un proceso deben estar razonadas con fundamento en las normas preexistentes (Alcalá, 2004). Este carácter restrictivo del derecho, es una herramienta de control encaminada a neutralizar el poder y a excluir las normas que no son legítimas dentro del Estado, y se enaltecen los derechos fundamentales como normas que debe respetar de forma obligatoria el poder público, con mayor razón cuando se intentan restringir derechos por medio de las leyes, como sucede con el derecho penal. Termina siendo indispensable el derecho fundamental al debido proceso en un Estado de Derecho como el colombiano, pues en este no existen poderes sin normas que los regulen, y nos son permitidos los abusos de poder, pues el poder se encuentra regulado no solo por los derechos, sino también por los deberes que le son impuestos (Ferrajoli, 2005a).

Siendo así, el debido proceso como derecho fundamental incorpora una gama de garantías no solo procesales, sino también sustanciales, que en todo caso, están estrechamente vinculadas a la concepción de justicia y equidad procesal (Rawls, 2004). Igualmente, como los señala el profesor Arturo Hoyos (2004) el derecho fundamental al debido proceso también funge como un instrumento que se identifica con todos los demás derechos fundamentales, en especial el de la libertad, pero a su vez también se identifica con los derechos prestacionales, pues obliga al poder público a asegurar las condiciones establecidas por las normas para cada proceso.

En esta línea, el derecho fundamental al debido proceso también implica que el poder público debe aplicar la ley más favorable al individuo, la favorabilidad se concibe desde la Constitución, para que ante conflictos de leyes que coexisten al mismo tiempo, y que sean aplicables al mismo asunto, se tenga claro que se debe actuar aplicando la más favorable. En beneficio del garantismo constitucional, nuestra carta fundamental plasma de forma explícita el principio de favorabilidad como parte íntegra del derecho fundamental al debido proceso, en otros Estados la enunciación desde la Constitución es indirecta, y no se establece tan claramente, lo que hace más difícil entender que se trata de un principio que se encuentra constitucionalizado (Ferrajoli, 2005). No obstante, en materia penal la aplicación del principio de favorabilidad a veces se torna demasiado garantista, pues termina beneficiando al delincuente que ejecuta actos punibles de forma permanente en el tiempo, en el cual varias normas pueden existir y tener vigencia legal, en estos casos el profesor Fernández Carrasquilla (1986) señala que:

“No hay una verdadera razón técnica ni humanitaria, para ultractivar una ley favorable pese a que el agente continuó cometiendo el hecho bajo una nueva ley más gravosa para él, que tampoco bastó para intimidarlo o disuadirlo. Tal posición equivale a dejar impune la parte del hecho ejecutado bajo la nueva ley, solución absolutamente inequitativa con respecto a quienes hayan comenzado a realizar el hecho después de expirada la vigencia de la ley anterior, resultando así injustamente favorecido el delincuente que más ha perseverado en el mantenimiento o la reiteración de la consumación”. (Carrasquilla, 1986, p. 128)

La Corte Constitucional en la sentencia C-225 de 2019 sugiere que la aplicación de la máxima “lo favorable debe ampliarse y lo odioso restringirse” (*favoralia amplianda sunt, odiosa restringenda*) solamente es procedente cuando “exista una sucesión de normas en el tiempo o tránsito legislativo, y la regulación de un mismo supuesto de hecho que conlleve consecuencias jurídicas distintas y la permisibilidad de una disposición frente a otra” (Corte Constitucional, Sentencia C-225 de 2019).

También el debido proceso como derecho fundamental en Colombia, contempla una serie de prerrogativas y garantías a favor de la persona, así, al presumirse la inocencia se acoge el

principio general del derecho *indubio pro homine*, el cual señala que en caso de duda se fallará a favor de la persona, lo que dicho de otro modo significa que una persona se presume inocente hasta que la autoridad competente no demuestre su culpabilidad. En efecto, la persona es juzgada por actos y para sancionarla se debe probar que ese acto fue cometido, no se juzgan sospechas o indicios, no se juzga con fundamento en mandatos o decisiones políticas, se juzga conforme a derecho (Montero, 2000).

En síntesis, en Colombia el derecho fundamental al debido proceso no solo guarda una relación directa con los otros derechos fundamentales, sino que en su esencia soporta varios derechos. La Corte Constitucional enumera los siguientes:

“(i) A la jurisdicción, que a su vez conlleva las garantías a un acceso igualitario de los jueces, a obtener decisiones motivadas, a impugnar las decisiones ante autoridades de jerarquía superior y al cumplimiento de lo decidido en el fallo; (ii) Al juez natural, identificado como el funcionario con capacidad legal para ejercer jurisdicción en determinado proceso o actuación, de acuerdo con la naturaleza de los hechos, la calidad de las personas y la división del trabajo establecida por la Constitución y la Ley; (iii) El derecho a la defensa”. (Corte Constitucional, Sentencia C-163 de 2019)

Ahora bien, del análisis realizado se puede decir que uno de los alcances, sino el más importante, es que con el derecho fundamental al debido proceso se tiene como finalidad proteger al individuo sujeto de actuaciones judiciales o administrativas, para que durante el respectivo procedimiento que sea adelantado se respeten los derechos que le asistan y se alcance una correcta aplicación de la justicia, así como ha sido señalado por la jurisprudencia al expresar que:

“El respeto al derecho fundamental al debido proceso, le impone a quien asume la dirección de la actuación judicial o administrativa, la obligación de observar, en todos sus actos, el procedimiento previamente establecido en la ley o en los reglamentos, con el fin de preservar las garantías -derechos y obligaciones- de quienes se encuentran incurso en una relación jurídica, en todos aquellos casos en que la actuación conduzca a la creación, modificación o extinción de un derecho o a la imposición de una sanción. En este sentido,

el derecho al debido proceso se muestra como desarrollo del principio de legalidad, pues representa un límite al ejercicio del poder público, y en particular, al ejercicio del *ius puniendi* del Estado. En virtud del citado derecho, las autoridades estatales no podrán actuar en forma omnímoda, sino dentro del marco jurídico definido democráticamente, respetando las formas propias de cada juicio y asegurando la efectividad de aquellos mandatos que garantizan a las personas el ejercicio pleno de sus derechos. Según lo ha destacado este Tribunal, el derecho al debido proceso tiene como propósito específico “la defensa y preservación del valor material de la justicia, a través del logro de los fines esenciales del Estado, como la preservación de la convivencia social y la protección de todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes y demás derechos y libertades públicas (preámbulo y artículos 1° y 2° de la C.P)”. (Corte Constitucional, Sentencia C-980 de 2010)

Finalmente, en el Estado colombiano el derecho fundamental al debido proceso tiene una tendencia garantista pues admite una serie de amparos en cabeza de los individuos, lo que además de todo lo analizado implica el respeto de las formalidades propias de cada una de las actuaciones del poder público. Esto obliga a las autoridades públicas a ceñirse al imperio de Ley, lo que impone el deber de que en los actos que ejecuten respeten las leyes preestablecidas, pues sus actos deben estar en armonía con las normas. Allí, vemos inmerso el derecho fundamental al debido proceso en el artículo 29 de la Constitución, derecho que es sustancial y adjetivo, derecho conexo a todos los demás derechos, derecho que contiene otros derechos, razón de peso para que en todos los casos que la actuación judicial o administrativa comporte la imposición de sanciones, la creación, modificación y extinción de un derecho, dicha actuación deba ser garante de los derechos fundamentales contemplados en la Constitución colombiana.

CONCLUSIONES

Como se puede apreciar de lo antes analizado, se evidencia que el debido proceso limita al poder y permite que no se atente contra los derechos de las personas que conforman una sociedad, lo que es indispensable en un Estado Social de Derecho.

Con la Constitución de 1991, Colombia adopta el debido proceso como derecho fundamental. Derecho que no es concebido únicamente desde su dimensión adjetiva, como garantía procedimental, sino que alcanza la dimensión sustantiva como un derecho fundamental nominado que busca ceñir el proceso a las normas. El derecho fundamental al debido proceso cumple un papel importante como instrumento que garantiza la vigencia de todos los derechos que tiene un individuo, exhorta al poder público a respetar las normas y derechos preestablecidos, y a que a las personas se le juzgue y administre conforme a estos. Notoriamente, el debido proceso en la práctica aporta las herramientas necesarias para establecer un parangón entre los elementos compositivos de un orden justo que procura por enaltecer la dignidad humana. La consolidación del derecho fundamental al debido proceso aparece como una consigna ineludible en el objetivo de alcanzar una mejor administración de justicia, administración de lo público, y reforzar los derechos de las personas lo que puede contribuir a fortalecer cada vez más al Estado Social de Derecho. Sobre esto, es importante señalar que el debido proceso desde su nivel irradia al sistema normativo como un parámetro jurídico, que debe ser aplicado en las distintas actuaciones que ejerza el poder en Colombia.

Sin el debido proceso no habría seguridad jurídica, pues no existiría un límite en las actuaciones del poder público. La Constitución podría plasmar derechos fundamentales, pero estos serían vulnerados indiscriminadamente, como la historia nos ha demostrado que ocurre en los regímenes totalitarios. Razón por la cual, se hace necesario asumir un rol vigía para que en Colombia se cumpla fehacientemente con el derecho fundamental al debido proceso, pues en lo estremecida que se encuentra la política de algunos Estados, el decisionismo como vía de hecho se ha convertido en derecho vigente, acarreando consecuencias alejadas del debido proceso como norma rectora del Estado constitucional moderno.

Desde la óptica que hemos adoptado con fundamento en lo analizado, el alcance más prevalente del derecho fundamental al debido proceso radica en el imperio de la Ley, pues sin la existencia del derecho sustancial y procedimental de manera preestablecida para direccionar las actuaciones del poder público, no sería posible construir un orden justo, pues dichas actuaciones penderían del azar. En esa dirección, con este derecho fundamental los individuos cuentan con la garantía de protección constitucional de que las actuaciones administrativas y judiciales están guiadas y limitadas por las normas preestablecidas, y que por lo tanto, las vías de hecho, el abuso de autoridad o las actuaciones arbitrarias no deben tener cabida en Colombia. Es con esta conclusión con la que se termina de tejer el análisis central de este documento, en el sentido de determinar doctrinaria, constitucional y jurisprudencialmente la importancia y los alcances de este instrumento contemplado en el artículo 29 de la Constitución.

Ante este panorama, resulta por demás pertinente hacer uso de los instrumentos internacionales que señalan las directrices del derecho humano al debido proceso y su carácter vinculante en los Estados que fueron firmantes de los Tratados Internacionales, pero que en la actualidad están mutando a regímenes de gobierno totalitarios, —como propuesta espero poder abordar este tema en un artículo posteriormente—, teniendo en cuenta que, el alcance del derecho fundamental al debido proceso se ha ratificado internacionalmente como límite al poder público, lo que significa que el poder no puede estar por encima de los derechos humanos.

REFERENCIAS

- Alcalá, H. N. (2004). Elementos del bloque constitucional del acceso a la jurisdicción y debido proceso proveniente de la Convención Americana de Derechos Humanos. *Estudios Constitucionales*, 2(1), 123-158.
- Alexy, R. (2002). Teoría de los Derechos Fundamentales. Madrid: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales.
- Bidart, G. C. (2004). *Compendio de derecho constitucional*. EDIAR Sociedad Anónima Editora, Comercial, Industrial y Financiera.
- Calamandrei, Piero (1962). Instituciones de derecho procesal civil. Buenos Aires: Ediciones JEA.
- Chinchilla, T. (2009) ¿Qué son y cuáles son los derechos fundamentales? Bogotá: Temis.
- Corwin, E. S. (1911). The Doctrine of Due Process of Law before the Civil War. *Harvard Law Review*, 24(6), 460-479.
- Díez-Picazo, L. M. (2013). Sistema de derechos fundamentales. Thomson Civitas.
- Echavarría, J. J. S. (1991). Algunas cuestiones básicas de la teoría de los derechos fundamentales. *Revista de estudios políticos*, (71), 87-110.
- Ferrajoli, L. (2001). Contra los poderes salvajes del mercado: para un constitucionalismo de Derecho privado. *Estrategias y propuestas para la reforma del Estado*, ed. Miguel Carbonell, et al, 99110.
- Ferrajoli, L. (2005). Derecho y razón: teoría del garantismo penal. Madrid: Trotta.

Ferrajoli, L. (2005a). Los fundamentos de los derechos fundamentales. Madrid: Trotta.

Fernandez C., J. (2004). Derecho Penal Fundamental. Bogotá: Ibáñez.

Haberle, P. (1997). La libertad fundamental en el Estado constitucional. Lima: Fondo Editorial.

Hoyos, A. (2004). El debido proceso. Bogotá: Editorial Temis.

Janik, A. (2005). A Dangerous Mind: Carl Schmitt in Post-War European Thought. By Jan-Werner Müller. New Haven and London: Yale University Press. 2003. Pp. xii+ 292. \$32.50. ISBN 0-300-099323-0. *Central European History*, 38(3), 500-502.

Linares, J. (1989). Razonabilidad de las Leyes, El debido proceso como garantía innominada en la Constitución Argentina, Buenos Aires: Astrea.

Naciones U. (1966). Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966. OHCHR: Documentos oficiales.

Naciones U. (2015). Declaración Universal de los Derechos Humanos (versión ilustrada). Naciones Unidas: Documentos oficiales.

Organización E.A. (1969). Convención Americana sobre derechos humanos. Departamento de Derecho Internacional de la OEA: Documentos oficiales.

Presidencia de la República. (1991). Constitución Política de Colombia. DAPRE.

Prieto-Sanchis, L. (1990). Estudios sobre derechos fundamentales, Madrid: Editorial Debate.

R.A.E. (2020). Diccionario de la lengua española.

Rawls, J., (1979). Teoría de la Justicia. México: Fondo de Cultura Económica.

Rodriguez-Rescia, V. M. (1998). El debido proceso legal y la convención americana sobre derechos humanos.

Sagüés, N. P. (1993). Elementos de derecho constitucional. Buenos Aires: Editorial Astrea.

Santana, Jorge (2016). El debido proceso. Bogotá: Editorial Prest&gio.

Santofimio, J. (2003). Tratado de derecho administrativo. Acto administrativo, procedimiento, eficacia y validez. Bogotá: Universidad Externado de Colombia.

Schneider, H. P. (1979). Peculiaridad y función de los derechos fundamentales en el Estado constitucional democrático. *Revista de Estudios políticos*, (7), 7-36.

JURISPRUDENCIA

Corte Constitucional de Colombia (16 de abril de 1993). Sentencia T-140/93. Referencia: expediente No. T-6289. Magistrado Ponente: Dr. Vladimiro Naranjo Mesa.

Corte Constitucional de Colombia (5 de junio de 1998). Sentencia T-280/98. Referencia: expedientes T-145620 y T-152265 (acumulados). Magistrado Ponente: Dr. Alejandro Martínez Caballero.

Corte Constitucional de Colombia (5 de junio de 1998). Sentencia T-280/98. Referencia: expedientes T-145620 y T-152265 (acumulados). Magistrado Ponente: Dr. Alejandro Martínez Caballero.

Corte Constitucional de Colombia (8 de octubre de 1999). Sentencia T-751A/99. Referencia: expediente T-221616 y T- 223227 (Acumulados). Magistrado Ponente: Fabio Morón Díaz.

Corte Constitucional de Colombia (29 agosto de 2001). Sentencia C-922 /01. Referencia: expediente D-3434. Magistrado Ponente: Dr. Marco Gerardo Monroy Cabra.

Corte Constitucional de Colombia (17 de marzo de 2003). Sentencia T-227/03. Referencia: expediente T-669050. Magistrado Ponente: Dr. Eduardo Montealegre Lynnet.

Corte Constitucional de Colombia (1 de marzo de 2005). Sentencia C-177/05. Referencia: expedientes D-5310 y D-5321. Magistrado Ponente: Manuel José Cepeda Espinosa.

Corte Constitucional de Colombia (15 de mayo de 2008). Sentencia C-483 de 2008. Referencia: expediente D-6935. Magistrado Ponente: Rodrigo Escobar Gil.

Corte Constitucional de Colombia (25 de febrero de 2016). Sentencia T-095 de 2016. Referencia: expediente T- 5.193.939. Magistrado Ponente: Alejandro Linares Cantillo.

Corte Constitucional de Colombia (10 de abril de 2019). Sentencia C-163/19. Referencia: expediente D-12556. Magistrada Ponente: Dra. Diana Fajardo Rivera.

Corte Constitucional de Colombia (23 de mayo de 2019). Sentencia C-225/19. Referencia: expediente D-12901. Magistrado Ponente: Dr. Antonio José Lizarazo Ocampo.

Corte IDH (6 de octubre de 1987). Garantías Judiciales en Estados de Emergencia (arts. 27.2, 25 y 8 Convención Americana sobre Derechos Humanos). OC-9/87.

Corte IDH (29 de enero de 1997). Caso Genie Lacayo Vs. Nicaragua. Sentencia de Fondo, Reparaciones y Costas.

Corte IDH (1 de octubre de 1999). El derecho a la información sobre la asistencia consular en el marco de las garantías del debido proceso legal. OC-16/99.

Corte IDH (6 de febrero de 2001). Caso Ivcher Bronstein Vs. Perú. Reparaciones y costas. Garantías judiciales y procesales.

Corte IDH (26 de agosto de 2011). Caso Torres Millacura y otros vs. Argentina. Derecho a la integridad personal, Derecho a la vida, Desaparición forzada, Garantías judiciales y procesales, Libertad personal, Personalidad jurídica, Protección judicial, Responsabilidad internacional del Estado.

Tribunal Constitucional de España (14 de junio de 1999). Sentencia 105/99. Magistrados: Don Carles Viver Pi-Sunyer, don Rafael de Mendizábal Allende, don Julio D. González Campos, don Tomás Salvador Vives Antón, don Vicente Conde Martín de Hijas y don Guillermo Jiménez Sánchez.